



Revista Insurrección

Edición No.418
Marzo/31/2014

SUMARIO

EDITORIAL

Paz Total o Guerra Total

4

'Somos Tierra Que Habla y Anda'

Autor: Comandante Pablo Beltrán

10

Crisis Estructural y Protesta Campesina

Autor: Jorge Mario Castro Mejía

15

La Alianza del Pacífico Contra Buenaventura

Autor: Luis Carlos Guerrero Ortega

18

Paraguay Cae en Picada Hacia el Neoliberalismo

Autor: Armando / Departamento Ideológico del ELN

24



Paz Total o Guerra Total

Arrancó la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, con el lema publicitario de la "paz total".

Con la elocuencia propia de las campañas electorales, en varios discursos el presidente-candidato ha explicado que la "paz total" es ir más allá de superar la guerra y silenciar los fusiles:

"Paz total es igualdad de oportunidades. Paz total es proponernos que todas las familias colombianas tengan la dignidad de un techo propio. Paz total es convertir al campo en una fuente de desarrollo, y que deje de ser un polo de pobreza. Paz total es que todo aquel que busque trabajo, lo consiga. Y que todo el que quiera hacer un negocio o empresa, lo pueda hacer".

Además, el candidato Santos ha tenido el atrevimiento de precisar que puede:

"Erradicar la miseria en los próximos diez años, ser el país más educado de América Latina en el 2025, abolir el déficit de vivienda y que los pobres tengan techo propio, y convertir el campo en polo de desarrollo".

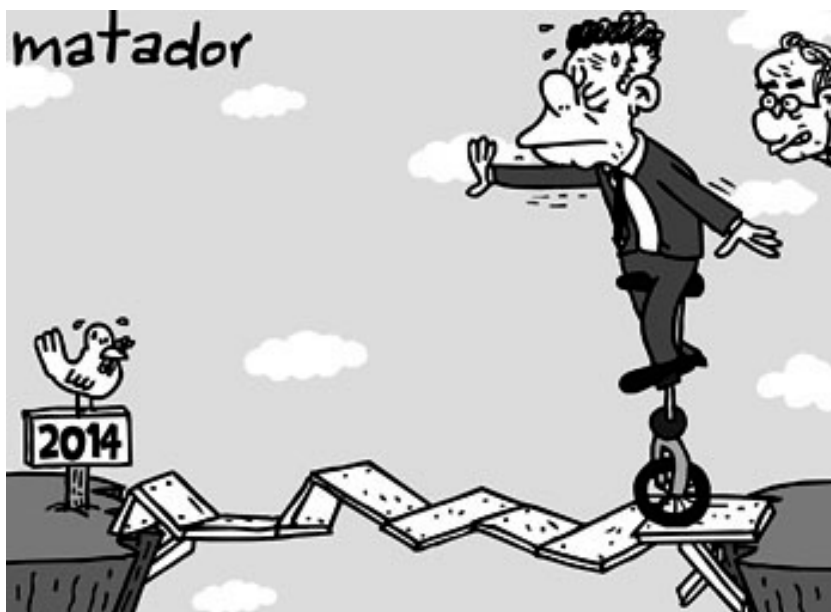
Lo que se quiere decir es, que si Santos logra otras dos reelecciones, automáticamente Colombia alcanzaría las condiciones de bienestar propias de un país socialista.

Pero dice el dicho que "obras son amores y no buenas razones", por eso es necesario evaluar las realizaciones del gobierno que está terminando, para mirar si estamos transitando el camino de la paz o de la guerra total.

Santos comenzó su gobierno, reconociendo que sí hay un conflicto interno y, con gran despliegue mediático anunció, que va a acabar con el desplazamiento interno y a devolver las tierras que les han despojado a los campesinos,

a sangre y fuego, en varias décadas de terrorismo de Estado.

De los 7 millones de hectáreas despojadas por los terratenientes y narco paramilitares, a los cerca de 6 millones de desplazados, sólo una ínfima proporción de sus dueños se atreve a pedir la devolución de sus tierras (la mayoría de ellos fueron asesinados y sus parientes no tienen formas legales de hacerlo), pero de esa pequeñísima cantidad de solicitantes, apenas se han aprobado devolver el 1,5 por ciento de las solicitudes; sin embargo, quienes logran la orden judicial no la pueden ejecutar, porque los terratenientes los rechazan a plomo. El informe de Human



Rights Watch, de enero de 2014 dice:

"Hasta septiembre de 2013 el gobierno había obtenido sentencias que ordenaban la restitución en 666 de las más de 45 mil solicitudes recibidas. En septiembre de 2013 —más de dos años después de la sanción de la Ley de Víctimas— el gobierno informó que tan sólo tres familias habían regresado a vivir en su tierra, como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley."

"Numerosos desplazados sufren amenazas y violencia por intentar reclamar su tierra. Entre enero de 2012 y septiembre de 2013, más de 700 desplazados y

sus líderes que exigían la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas denunciaron ante las autoridades que habían recibido amenazas". También, han visto caer asesinados 69 de sus principales líderes.

Acabar con el desplazamiento también se ha quedado en retórica, pues durante el gobierno de Santos el desplazamiento sigue a un ritmo anual de un cuarto de millón de colombianos. El informe de Human Rights Watch, dice:

"Según el gobierno, más de 150 mil personas fueron desplazadas en 2012, mientras que CODHES, una respetada organización no gubernamental (ONG) colom-

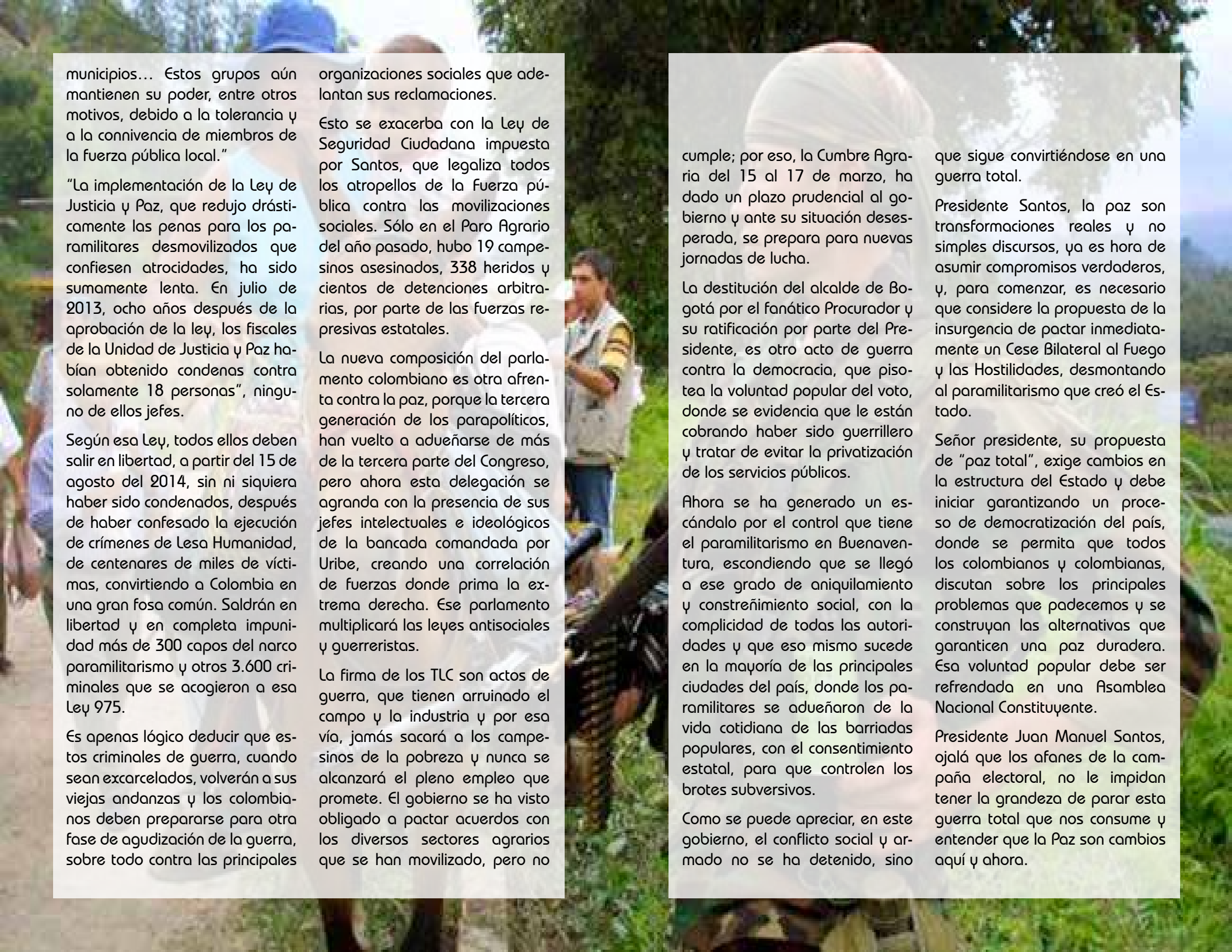
biana, informa que casi 260 mil colombianos fueron desplazados ese año."

"...Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afro colombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia." Colombia sigue manteniendo el deshonesto primer puesto en este tipo de violaciones de los Derechos Humanos.

Lo anterior quiere decir que sigue existiendo una abierta hostilidad del Estado contra las organizaciones sociales, criminalizando la protesta y el reclamo de los derechos sociales. El terrorismo de Estado se mantiene en el gobierno de Santos y el paramilitarismo sigue siendo su herramienta principal, ahora con el nombre de Bandas criminales (Bacrim). Según Human Rights Watch:

"A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares: en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167





municipios... Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública local."

"La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas", ninguno de ellos jefes.

Según esa Ley, todos ellos deben salir en libertad, a partir del 15 de agosto del 2014, sin ni siquiera haber sido condenados, después de haber confesado la ejecución de crímenes de Lesa Humanidad, de centenares de miles de víctimas, convirtiendo a Colombia en una gran fosa común. Saldrán en libertad y en completa impunidad más de 300 capos del narco paramilitarismo y otros 3.600 criminales que se acogieron a esa Ley 975.

Es apenas lógico deducir que estos criminales de guerra, cuando sean excarcelados, volverán a sus viejas andanzas y los colombianos deben prepararse para otra fase de agudización de la guerra, sobre todo contra las principales

organizaciones sociales que adelantan sus reclamaciones.

Esto se exagera con la Ley de Seguridad Ciudadana impuesta por Santos, que legaliza todos los atropellos de la Fuerza pública contra las movilizaciones sociales. Sólo en el Paro Agrario del año pasado, hubo 19 campesinos asesinados, 338 heridos y cientos de detenciones arbitrarias, por parte de las fuerzas represivas estatales.

La nueva composición del parlamento colombiano es otra afrenta contra la paz, porque la tercera generación de los parapolíticos, han vuelto a adueñarse de más de la tercera parte del Congreso, pero ahora esta delegación se agranda con la presencia de sus jefes intelectuales e ideológicos de la bancada comandada por Uribe, creando una correlación de fuerzas donde prima la extrema derecha. Ese parlamento multiplicará las leyes antisociales y guerreristas.

La firma de los TLC son actos de guerra, que tienen arruinado el campo y la industria y por esa vía, jamás sacará a los campesinos de la pobreza y nunca se alcanzará el pleno empleo que promete. El gobierno se ha visto obligado a pactar acuerdos con los diversos sectores agrarios que se han movilizad, pero no

cumple; por eso, la Cumbre Agraria del 15 al 17 de marzo, ha dado un plazo prudencial al gobierno y ante su situación desesperada, se prepara para nuevas jornadas de lucha.

La destitución del alcalde de Bogotá por el fanático Procurador y su ratificación por parte del Presidente, es otro acto de guerra contra la democracia, que pisotea la voluntad popular del voto, donde se evidencia que le están cobrando haber sido guerrillero y tratar de evitar la privatización de los servicios públicos.

Ahora se ha generado un escándalo por el control que tiene el paramilitarismo en Buenaventura, escondiendo que se llegó a ese grado de aniquilamiento y constreñimiento social, con la complicidad de todas las autoridades y que eso mismo sucede en la mayoría de las principales ciudades del país, donde los paramilitares se adueñaron de la vida cotidiana de las barriadas populares, con el consentimiento estatal, para que controlen los brotes subversivos.

Como se puede apreciar, en este gobierno, el conflicto social y armado no se ha detenido, sino

que sigue convirtiéndose en una guerra total.

Presidente Santos, la paz son transformaciones reales y no simples discursos, ya es hora de asumir compromisos verdaderos, y, para comenzar, es necesario que considere la propuesta de la insurgencia de pactar inmediatamente un Cese Bilateral al Fuego y las Hostilidades, desmontando al paramilitarismo que creó el Estado.

Señor presidente, su propuesta de "paz total", exige cambios en la estructura del Estado y debe iniciar garantizando un proceso de democratización del país, donde se permita que todos los colombianos y colombianas, discutan sobre los principales problemas que padecemos y se construyan las alternativas que garanticen una paz duradera. Esa voluntad popular debe ser refrendada en una Asamblea Nacional Constituyente.

Presidente Juan Manuel Santos, ojalá que los afanes de la campaña electoral, no le impidan tener la grandeza de parar esta guerra total que nos consume y entender que la Paz son cambios aquí y ahora.

‘Somos Tierra Que Habla y Anda’

El Paro agrario de 2013, lo recordamos como ‘la rebelión de las ruanas, los ponchos y los bastones’ y gracias a él, hoy la sociedad colombiana cuenta con una Propuesta alternativa sobre tierra, territorio, participación y desarrollo, hecha pública el pasado 16 de marzo, en la Declaración final de la Cumbre agraria, que lleva el nombre de “Sembrando dignidad, labrando esperanza y cosechando país”.

El Conflicto Social y Armado que han impuesto las oligarquías, retomando apartes de la Declaración podemos agrupar en tres, los planteamientos principales que sostienen esta Propuesta alternativa:

[1] Participación en el ordenamiento y el gobierno del territorio.

“Mediante un ejercicio de soberanía, debemos ser los pueblos y las comunidades quienes ordenemos el territorio, definamos sus usos y las distintas maneras de habitarlo. Este ordenamiento territorial popular debe armonizar la conservación del medio ambiente... Nuestras propuestas territoriales exigen el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades”.



[2] Modelo económico Para el Buen Vivir

“Es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas multinacionales, acaba con la economía campesina y destruye la vida... La Cumbre propone un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afro descendientes y de los sectores populares... Proponemos programas de sustitución autónoma, gradual y concertada (de la coca, amapola y marihuana), el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización.”.

[3] El pueblo soberano Construye la paz

“La Cumbre es parte transitoria de un proceso constituyente caminado de la mano de la Minga indígena, los congresos de los pueblos, consejos territoriales del pueblo, los procesos constituyentes por la paz con justicia social, los mecanismos de participación directa y la autonomía que a diario ejercen las comunidades del campo y la ciudad que reclaman ser reconocidas. El acuerdo político y social que edifique la paz deberá ser la parte culminante de este proceso constituyente”.

La madre Tierra

Esta Propuesta hunde sus raíces en la forma de ver el mundo propia de los pueblos aborígenes, quienes consideran que "somos Tierra que habla y anda", que determina una relación armónica entre la gente y el Planeta; muy distinta de la sostenida por los dominadores del mundo, quienes consideran que el control del territorio, da la ventaja para ganar la guerra a las clases subalternas.

La etnia Kankuamo, una de las que puebla la Sierra nevada de Santa Marta, en las Conclusiones del Tercer Congreso de su Organización indígena, enseña cómo ven ellos la relación entre tierra y territorio:

"Se entiende por territorio un conjunto de cosas, la cultura, la relación cultural que tiene esa comunidad con el territorio... La relación de los pueblos indígenas con la tierra está planteada con los sitios sagrados, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la interpretación misma de los ciclos naturales. Lo primero que tiene que ver con los territorios son las personas, después la relación de las personas con el espacio".

Conocer y decidir el propio destino

El Plan de desarrollo nacional y los Planes de ordenamiento territorial los deciden una minoría gobernante, a favor de ellos mismos y de un puñado de empresas

multinacionales, esta tradición anti democrática debe terminar.

El orden social, el sistema político y el modelo económico que garanticen el futuro digno de la gente, debe ser decidido y construido por las mayorías nacionales, esta es la era que debe comenzar.

Desde la localidad, hasta lo nacional, el corazón de la participación ciudadana está en que cada colombiano de manera directa, exprese su sentir sobre qué bienestar desea para su comunidad y se comprometa con esta construcción.

La democracia es participación y compromiso, y a democratizar

el país aporta la Propuesta alternativa que concluye la Cumbre.

Desde los años 90 del siglo anterior, en las ciencias sociales han surgido iniciativas que impulsan la participación ciudadana, como la referida por Len Barton, en "Discapacidad y sociedad":

"La cartografía social es una herramienta que permite a las comunidades realizar un ejercicio de diagnóstico y proyección sobre sus necesidades, sueños y planes de vida. También les permite conocer y construir un conocimiento integral de su territorio con el fin de que puedan elegir una mejor manera de vivirlo".





No dejemos privatizar El Bien Común

En contra corriente con las poderosas elites que quieren adueñarse de todo, algunas Agencias de la ONU avanzan en mejorar la normatividad internacional, con la finalidad de aliviar y frenar la crisis planetaria, que amenaza con la extinción de todas las especies, comenzando por la humana. Uno de estos aportes, es obra del señor Rajindar Sachar, Relator especial de la Comisión de derechos, quien en su Informe del 22 de junio de 1993, concluyó que:

"La tierra no puede ser tratada como un bien ordinario, contro-

lado por los individuos y sujeto a las presiones e ineficiencias del mercado".

La crisis alimentaria mundial agudizada por la especulación con productos agropecuarios y la manera como las multinacionales del agro dicen resolverla, en realidad empeoran el problema del hambre. Por esto la decisión de la Cumbre de respaldar a la economía campe-

sina, en la búsqueda de la soberanía alimentaria, va en la dirección acertada para resolver esta crisis.

Activistas sociales como la periodista Esther Vivas, del blog "Se cuecen habas", en Publico.es, sintetizan los problemas del hambre, la tierra y los alimentos, en la crítica a la privatización del Bien Común:

"Si queremos acabar con el hambre en el mundo es fundamental garantizar el acceso universal a la tierra, así como al agua y a las semillas, y prohibir especular y hacer negocio con aquello que nos alimenta y nos da de comer".



Crisis Estructural y Protesta Campesina

La crisis del campo hace parte de la crisis general de sistema capitalista, del calentamiento del planeta, el modelo neoliberal, las imposiciones a través de guerras y los mercados, de la semilla transgénica, los TLC firmados con países que nos hacen una competencia desigual, como: EEUU, China, Japón, Canadá, México, Unión Europea, entre otros.

País agrario con atraso generalizado

La pobreza cubre el 64,3 por ciento de la población rural y un tercio de ella se halla en la miseria.

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 2009 el 78,3 por ciento de los propietarios de 1 a 5 hectáreas ocupaban menos del 6 por ciento del área registrada, mientras que el 55 por ciento de ésta pertenecía al 0,15 por ciento de los propietarios, terratenientes con predios superiores a mil hectáreas.

El microfundio con sólo ingresos de origen agropecuario, cuenta con remuneraciones familiares mensuales de menos de un salario mínimo (616 mil pesos), que significa recibir menos de 1.900 pesos diarios por persona; ingresos situados muy por debajo del costo de la Canasta familiar.

En 2009, una Unidad Agrícola Familiar en predios microfundistas presentaba un avalúo por hectárea entre 500 mil y un millón de pesos, mientras la hectárea de un terrateniente vale 20 millones.

De las 22,1 millones de hectáreas aptas para producir, el país solo utiliza 5,3 millones para la agricultura, el 21 por ciento de su potencial, mientras 39,9 millones de hectáreas se destinan a la ganadería. Por cada hectárea agrícola, que genera más empleo, hay ocho hectáreas dedicadas a la ganadería. Modelo de propiedad de la tierra, que está en la base misma de la desigualdad nacional.

La producción de leche, según informes del mismo gremio, ha disminuido entre un 45 y 50 por ciento y están en riesgo de desaparecer 200 mil productores, lo que agravaría el desempleo en el campo.

Los pequeños productores que emplean mano de obra familiar son cerca de 2,2 millones de

personas, que equivalen al 20 por ciento de la población rural.

Dependencia Tecnológica y alimentaria

La oligarquía mantiene un modelo económico que produce inequidad, que se expande ocasionando grandes costos humanos, destrucción a la naturaleza, acaba con la biodiversidad, con la poca industrialización que había, y con la pequeña y mediana economía campesina, que producía el 70 por ciento de los alimentos del país.

Gran parte de nuestro territorio se usa irracionalmente para la producción de los agro combustibles, destinados al mantenimiento de máquinas en los países industrializados, a costa de aumentar la desnutrición y el hambre en Colombia.

La importación masiva e invasiva de productos de la dieta básica, como le-

che, arroz, papa, cacao, cerdos, huevos, pollos y café, nos convirtió en un país dependiente de las transnacionales, lo que acarrea una desmejora de la calidad de la dieta básica de los colombianos y la pérdida de la soberanía alimentaria.

Por órdenes de Uribe y Santos hay que comprar las semillas certificadas de multinacionales como Monsanto, bajo la vigilancia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Estas semillas dan una sola cosecha, mientras el Decreto 970 prohíbe el uso de semillas nativas. Por causa de las semillas transgénicas han muerto ya muchos colombianos; además de sufrir crecimiento prematuro, obesidad, diabetes, desnutrición y trastornos hormonales.

La solución está al alcance de la mano

Con el paro agrario de Agosto de 2013, estalló la Indignación del pueblo, ante el engaño oligárquico, que vendió la ilusión de un país mejor con los TLC, y dijo que desarrollo y vida iban a germinar con la "prosperidad para el capital".

El paro agrario demostró que es posible cambiar las políticas agrarias, que golpean a los campesinos pobres y medios; la suspensión del Decreto 970 que penalizaba a los agricultores por conservar y reproducir semillas autóctonas, así lo demuestra.

La solución a los males del campo está en la ruta trazada por la recién pasada Cumbre agraria, que es de confluencia popular, unidad de acción, movilización, lucha y construcción de paz.





La Alianza del Pacífico Contra Buenaventura

La reciente Cumbre de la Alianza del Pacífico la debían haber hecho en Buenaventura, pero el gobierno la hizo en el puerto caribeño de Cartagena, ¿por qué esconden a éste, el principal puerto colombiano?

Buenaventura es el epicentro de la Alianza del Pacífico, por donde pasan 16 millones de toneladas de importaciones y exportaciones colombianas. Sin embargo un poblador manifiesta que “vemos correr el dinero para otro lado, aquí queda es lo que poco que sobra y esto se los embolsillan unos pocos”.

Con humor ácido, la gente dice que “la comida más saludable que se consume en el mundo, es la del puerto de Buenaventura porque toda está vacunada”. Crítica dirigida a los impuestos llamados “vacunas”, que las mafias paramilitares cobran por igual a pescadores y comerciantes grandes, medianos y pequeños.

Entre bahía Málaga y la bahía de Buenaventura hay una distancia de escasos 9 kilómetros, en la primera se encuentra la principal Base militar de la infantería de Marina de todo el Pacífico colombiano, tan estratégica que fue reforzada por la infantería de Marina de los Estados Unidos, hace dos décadas, en una operación que camuflaron como “humanitaria”, al presentarla como la construcción de una escuelita y un puesto de salud en las playas de Juanchaco.

Si el puerto de Buenaventura está tan militarizado, ¿por qué proliferan los escuadrones paramilitares? Y, ¿para qué van a servir los 1500 efectivos que el presidente Santos va a enviar?

Once ríos desembocan en las proximidades de Buenaventura, pero más de la mitad de sus habitantes no cuentan con servicio de agua potable. Problema que el gobierno no va a resolver solamente con más militarización.

Los objetivos violentos de la Alianza

El plan de gobierno de Santos, clasifica al país en Áreas de desarrollo territorial (ADT) y califica a Buenaventura como un polo, que dinamiza los flujos económicos de una gran región que incluye a Bogotá, el centro

y occidente del país, que cuenta con una alta movilidad para las exportaciones hacia los países de la cuenca del Pacífico y para mover las importaciones hacia los principales centros urbanos del país.

Desde antes, el Pacífico colombiano se convirtió en un espacio altamente estratégico, que explica la disputa por esta región y por esto en sus ciudades y comunidades como Buenaventura, Tumaco, Quibdó y Juradó, es más intensa la violencia para desalojar territorios, para romper los tejidos comunitarios ancestrales, el escalamiento de los agro-negocios y la venta del territorio.

Es llamativo que los principales lugares constituidos en botaderos de cadáveres de las víctimas





de los paramilitares en Buenaventura, sean las Comunas de los territorios de Baja Mar, los barrios insulares y en toda la periferia de los once ríos. En estos lugares es donde proyectan construir los cinco principales mega proyectos, entre los que están el Terminal Delta del Río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la Zona Franca Celpa.

Tanta miseria como en África

A pesar de recibir buenos ingresos, la ciudad de Buenaventura junto a los departamentos de Chocó y Sucre tiene los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

El nivel de pobreza y miseria de este puerto es tres veces más

alto que en todo el Valle del Cauca, su población presenta las tasas más altas de analfabetismo y carencia de servicios de salud, los cuales empeoraron al ser privatizados los pocos que había. El desempleo está cerca del 60 por ciento.

Crisis social que el gobierno insiste en esconder, cuando presenta los problemas y soluciones para el puerto, como un asunto netamente represivo. "Buenaventura ha sido objeto de intervenciones en el pasado. Estamos en proceso de hacer una intervención de fondo en materia de orden público", acaba de manifestar el presidente Santos.

¿Por qué las mujeres son la mayor parte de las víctimas?

"No tenemos que decir nada, uno cierra la tienda, se encierra en la casa a las ocho y recuerda siempre que no puede llegar tarde. Yo no puedo ver a nadie corriendo. Si lo veo, me tengo que meter de una a la primera casa", dice una líder comunitaria de un barrio que solía ser tranquilo hasta hace dos años.

Por su parte, un comunicado de la Iglesia Católica señala que "desde noviembre de 2012 la Diócesis de Buenaventura le viene advirtiendo al presidente Juan Manuel Santos, que el miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia

en medio de esta prolongada guerra".

La mayoría de las víctimas que matan, pican y diseminan sus restos por las calles, son mujeres. Ellas sufren la mayor persecución y acoso, la prohibición de sus movimientos nocturnos, son las que padecen con más rigor el destierro y el encierro, y ahora, son las que son sometidas a más muertes y desmembramientos.

El genocidio persigue quebrar, fraccionar, volver añicos el tejido social ancestral y sus soportes psicológicos, que le dan sentido de pertenencia. Y sucede que en Buenaventura, como en muchas regiones del país, un punto de sustento fundamen-



tal de este tejido son las mujeres. Toda la región Pacífica está siendo sometida a una política que apunta a producir desbandada y destrucción golpeando las fortalezas del tejido comunitario.

El microtráfico Dopa a la juventud

La propagación del micro tráfico de drogas, monopolizado por las bandas paramilitares, se ha enseñoreado de los barrios populares.

Con el micro tráfico apuntan a propiciar la descomposición social y la desorientación entre la población juvenil, quienes ante la situación de desempleo abundante, encuentra en el micro tráfico una posibilidad de te-

ner algún ingreso para la sobrevivencia individual, pero quedan atrapados en el vicio, a la vez que extirpan las posibilidades de una lucha colectiva por la vida.

Todo se conjuga para crear lo que denuncia la Diócesis de Buenaventura, una atmósfera de zozobra permanente a punta de amenazas, de "vacunas" y de reclutamiento a los jóvenes. La crisis humanitaria que planeó el régimen ya está fabricada y en marcha.

Construcción colectiva de la esperanza

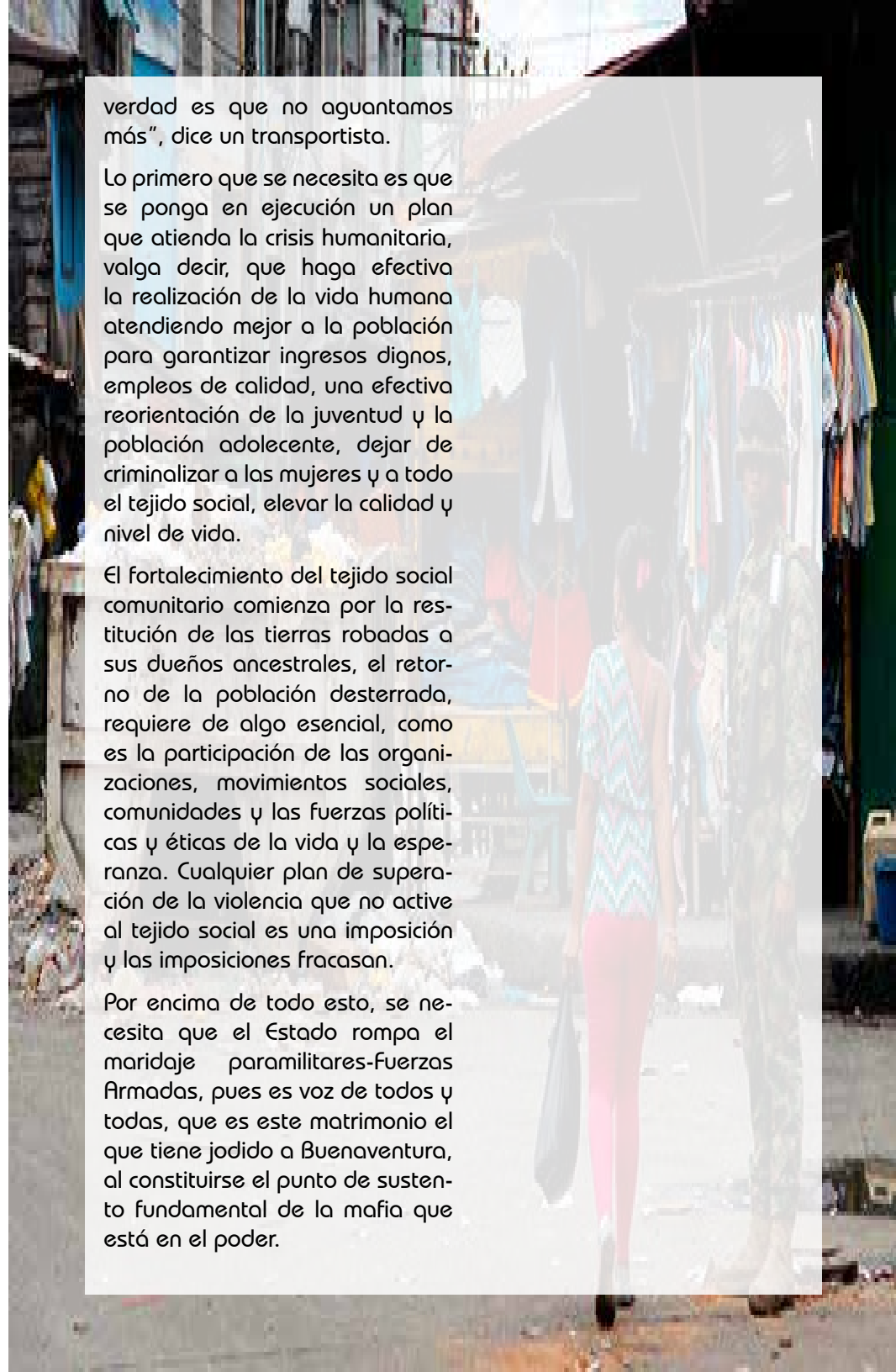
"Ya metimos un dedo, ya nos embarramos la mano. Como nadie tiene la valentía de decir solo, nos toca en manada. Y la

verdad es que no aguantamos más", dice un transportista.

Lo primero que se necesita es que se ponga en ejecución un plan que atienda la crisis humanitaria, valga decir, que haga efectiva la realización de la vida humana atendiendo mejor a la población para garantizar ingresos dignos, empleos de calidad, una efectiva reorientación de la juventud y la población adolescente, dejar de criminalizar a las mujeres y a todo el tejido social, elevar la calidad y nivel de vida.

El fortalecimiento del tejido social comunitario comienza por la restitución de las tierras robadas a sus dueños ancestrales, el retorno de la población desterrada, requiere de algo esencial, como es la participación de las organizaciones, movimientos sociales, comunidades y las fuerzas políticas y éticas de la vida y la esperanza. Cualquier plan de superación de la violencia que no active al tejido social es una imposición y las imposiciones fracasan.

Por encima de todo esto, se necesita que el Estado rompa el maridaje paramilitares-Fuerzas Armadas, pues es voz de todos y todas, que es este matrimonio el que tiene jodido a Buenaventura, al constituirse el punto de sustento fundamental de la mafia que está en el poder.





Paraguay Cae en Picada Hacia el Neoliberalismo

Buenaventura es noticia, por el martirio que sufren sus habitantes, la gran mayoría, afro colombianos. Contradiciendo la versión del Ministro de la Defensa, un comerciante del puerto entrevistado por la Silla Vacía afirma que: “la violencia acá no ha subido en Buenaventura, simplemente no hay más fondo a dónde caer. Tenemos mordaza y grillete: por eso, o nos paramos o nos entierran”.

Esta ciudad de la costa Pacífica, de 400 mil habitantes, se convirtió en el principal puerto colombiano, luego de la construcción del Canal de Panamá, hace un siglo largo. Por ella salen el 80 por ciento de las exportaciones de café y pasan dos tercios de todo el comercio exterior colombiano.

La espiral de violencia se origina en la maraña tejida por el capital mafioso, emparentado con empresarios, para-políticos, militares y paramilitares de nuevos nombres, en el objetivo de acondicionar toda la región para los planes de desarrollo neoliberal, para la captación y apropiación por vía violenta de la renta portuaria, ejecutando una política de exterminio, desalojo, expropiación y miedo.

Masacrar para despojar

Hoy se reconoce que desde el año 2.000, comenzó el desalojo, el destierro y terror contra la población de Buenaventura. La población

del puerto recuerda que el 11 de mayo del año 2000 en el corregimiento de Sabaletas las bandas paramilitares asesinaron a 11 campesinos y produjeron el desplazamiento de otros 2 mil 500. Esta masacre la realizaron para despojar las tierras a lado y lado de la autopista de doble calzada Cali – Buenaventura. Por esto la llaman “la doble calzada de la muerte”.

La guerra sucia comandada por la oligarquía del Valle de Cauca, se ensañó contra este puerto, para lo cual crearon en alianza con el clan Castaño Gil, el Bloque Calima del paramilitarismo, que “asesinó a sangre y fuego más de mil personas entre los años 2000 y 2001 en Buenaventura, para sembrar terror”, según confesión hecha por el capo alias HH.

Al multiplicarse los escuadrones paramilitares coparon cada Comuna del puerto y echaron honddas raíces, luego del premio que les concedió el ex presidente Uribe, al legalizarlos con la Ley de justicia y paz en 2002.

Las disputas entre las bandas (Chocoanos, Empresa, Empresa, Rastrojos, Urabeños, etc.) crecen cada día, por las rutas de exportación de cocaína y de toda clase de contrabando, por tierras para extracción de oro

con retroexcavadoras, por los bosques para talar sus maderas, etc. La guerra intestina por el control territorial, también abarca el cobro de extorsiones a todos los comerciantes grandes y pequeños, y el expendio de drogas estupefacientes.

Crece la protesta ciudadana

Este 19 de febrero sucedió un hecho significativo. 40 mil personas, en su mayoría pobres, clase media, afro descendientes, mestizos, jóvenes y muchísimas mujeres (el 60 por ciento de los movilizados), trabajadores portuarios, pequeños comerciantes, vendedores estacionarios, se movilizaron por la vida, en rechazo a la violencia y por la paz, cubriendo con una estela blanca el territorio del puerto de Buenaventura.

El 12 de marzo se volvió a movilizar la población con una modalidad distinta, no marcharon por las calles, sino que se estacionaron frente a las puertas cerradas de sus comercios, de la pequeña y mediana economía. Fue un día de parálisis cívica en que todo permaneció cerrado. No trabajo ningún vendedor estacionario, las tiendas no abrieron, los colegios cerraron y la vida económica se redujo a cero, en una manera pacífica y digna



de expresar la aspiración de la paz. El puerto dejó de cargar mercancías.

Las terroríficas Casas de piques

Denuncia el Portal La Silla vacía, que "un taxista recogió una pasajera en el hospital a las cuatro de la madrugada. Acaban de darle el alta y no tenía cómo regresar a su barrio en la Comuna 12. El conductor dudó en llevarla pero finalmente accedió, solo para ser frenado a la entrada del barrio. Allí le dijeron los Urabeños, "¿Usted qué hace aquí? ¿Usted se quiere hacer picar?". Al final le lanzaron un ultimátum: "por acá no se vuelva a aparecer" y lo dejaron ir.

A las Casas de pique, los paramilitares llevan a las personas para matarlas y descuartizarlas,

picándoles sus cuerpos, para luego regarlos por los barrios.

La desobediencia de cualquier poblador a las normas impuestas por las bandas paramilitares, la castigan primero con la amenaza de llevarlo a una de estas Casas. Pasar de la amenaza a la ejecución del descuartizamiento, es sólo cuestión de segundos.

La población de Buenaventura ha informado desde hace tiempo al gobierno y a los militares sobre la existencia de estos centros de crimen. Incluso la Defensoría del Pueblo desde octubre de 2013, ha denunciado la aparición de personas torturadas y desmembradas en los barrios más pobres, localizados en la zona insular y de baja mar.

La inacción de militares y policías ante las denuncias de la ciudadanía, demuestra su complicidad con los paramilitares.

Llamamiento a la movilización contra el genocidio

Según la Defensoría del Pueblo en Buenaventura, estos primeros meses de 2014, han sido asesinadas 54 personas y desde el año 2010 han desaparecido más de 243 personas; en 2013 se tuvieron que desplazar unas 5 mil personas, mientras que en 2012 los desplazados fueron unos 7.500.

Buenaventura es la ciudad con mayor número de desplazados del país, teniendo en cuenta que estas cifras representan apenas un escaso número de personas, que han hecho denuncias ante instancias gubernamentales, y se sabe que por temor la mayoría de personas no se atreven a denunciar.

Los estudios hechos por varias

Misiones de acompañamiento humanitario concluyen que esta modalidad de genocidio, el régimen también la viene aplicando en ciudades como Medellín, Soacha, Tumaco, Quibdó y otras.

Llama la atención que son tres ciudades de la región Pacífica (Buenaventura, Tumaco, Quibdó), de absoluta mayoría afro colombiana, las mayores generadoras de desplazamiento, lo que devela una trágica estrategia de las elites dominantes contra toda la región del Pacífico, por ser una pieza clave para el futuro de su modelo neoliberal.

Acompañar en su lucha a las mayorías sufridas y explotadas del Pacífico colombiano, es un deber moral de todos. La consigna está dicha:

"¡O nos plantamos o nos entierran!"





**HUGO
CHÁVEZ**

!Gloria al bravo pueblo...!